



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Medio de control: Ejecutivo
Radicado: 15001 33 33 011 2018 00153 00
Demandante: Marlene Morales Rincón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el mandamiento de pago promovido por la señora Marlene Morales Rincón contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Construcciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

I. Antecedentes.

La parte demandante solicitó se libre mandamiento de pago contra la UGPP y a favor de Marlene Morales Rincón, por los siguientes conceptos¹:

*“1. ... a fin de que dé cumplimiento integral al fallo proferido dentro del fallo de Nulidad y Restablecimiento del Derecho proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja el 6 de julio de 2016 y que fuere confirmado en todas y cada una de sus partes por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 24 de marzo de 2017 y en especial lo contenido en el numeral 4 en cuanto a los factores que se deben tener en cuenta y el último año de servicios así: “...el valor de la pensión de jubilación equivalente al **75% del promedio de salarios devengados durante el último año de servicios , esto es desde el 1 de noviembre de 1996 al 31 de octubre de 1997.** Es decir que los factores salariales ya conocidos —sueldo (asignación básica más prima de antigüedad), bonificación por servicios prestados y bonificación por compensación, **se le adicionarán los factores salariales auxilio de alimentación, prima de navidad, prima de vacaciones prima semestral ,...**”*

*2. Se declare el embargo y retención de los dineros que se encuentren en la cuenta corriente número 110- 026-001699-3 del Banco Popular a nombre de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIONA PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES —UGPP** por las sumas de dinero reconocidas dentro del presente proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho:*

- Por concepto de diferencia de mesadas pensionales a reconocer la suma de SETENTA Y UN MILLONES UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MDA/CTE (\$71.001.530,21.oo).*
- Por concepto de indexaciones de mesadas pensionales, la suma de veinte millones trescientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco pesos (\$20.354.145,oo)*
- Por concepto de costas y agencias en derecho la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UN PESOS MDA/CTE (\$167.601).*

3. Se ordene Reliquidar el Crédito y en consecuencia se condene a la demandada al pago de intereses por mora a que haya lugar por la demora en el pago de la condena.

4. Se ordene indexar a las fecha de pago las sumas de dinero reconocidas.

¹ Ver folio 2.

5. Se condene en costas y agencias en derecho.”

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

- Competencia

En los términos de los artículos 104 numeral 6 y 297 del CPACA, este Juzgado es competente para conocer de la presente ejecución, toda vez que se demanda por vía ejecutiva el valor de la condena contenida en sentencia de 6 de julio de 2016, proferida por este Despacho judicial en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3333 004 2015 00181 00, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá con providencia de 24 de marzo de 2017, y que cobró ejecutoria el 30 de marzo de 2017 (fl. 8).

De otro lado, en virtud del numeral 7 del artículo 155 *ejusdem*, este Despacho es competente para conocer de esta demanda en razón de la cuantía, al encontrar que la misma no supera la suma de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (f. 5).

- Caducidad

La demanda fue formulada dentro de la oportunidad legal prevista en el literal K, numeral 2 del artículo 164 del CPACA, al considerar que la sentencia cobró ejecutoria el 30 de marzo de 2017 (f. 8), y que transcurrieron los diez (10) meses de que trata el artículo 192 *ibídem*, sin que se hubiere superado el término de caducidad de cinco (5) años, habida cuenta de que el medio de control fue promovido el 22 de agosto de 2018 (f. 47).

- Del título ejecutivo:

En los términos del artículo 297 del CPACA, constituyen título ejecutivo para esta jurisdicción, entre otros documentos, los siguientes:

“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”

Con relación al contenido del título ejecutivo, el artículo 422 del Código general del Proceso dispone:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señálela ley....”.

A su turno, el Consejo de Estado ha señalado que el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (hoy art. 422 del CGP), estableció las condiciones formales y de fondo que debe reunir el título ejecutivo, las primeras, en el sentido de que los documentos que integran el título conformen una unidad jurídica, es decir, que sean **auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante; **de una sentencia de condena proferida por el juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, **de las providencias que en procesos contencioso administrativos** o de policía aprueben liquidación de costas o señalen

honorarios de auxiliares de la justicia; las segundas, por su parte, buscan que en los documentos que sirven de base para la ejecución aparezcan consignadas obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, y que sean líquidas o liquidables por simple operación aritmética, en el caso de obligaciones pagaderas en dinero.²

Bajo las anteriores precisiones, y teniendo en cuenta los documentos aportados por la parte demandante, es pertinente señalar cuáles son los documentos que integran el título ejecutivo, que para el caso que nos ocupa es un título ejecutivo complejo.

Pues bien, cuando la obligación proviene de una sentencia judicial, debe integrarse el título ejecutivo complejo con la primera copia que presta mérito ejecutivo de la respectiva providencia judicial y la copia auténtica de la misma, así como aquellos documentos que contengan la obligación clara, expresa y exigible.

Cuando se ejecuta, entonces, con fundamento en un título ejecutivo complejo, es indispensable que todos y cada uno de los documentos que lo conforman, en su conjunto, evidencie la existencia de la obligación con las características previstas en el artículo 422 del CGP, y sean aportados en legal forma para poder librar mandamiento de pago.

En este caso, tenemos que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dictó sentencia condenatoria de primera instancia el 6 de julio de 2016, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho N° 15001 3333 004 2015 00181 00 (fs. 9-21), la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante providencia de 24 de marzo de 2017, donde se condenó en costas de segunda instancia a la parte demandada y se fijó como agencias en derecho la suma de \$148.601 (fls. 22-29); decisiones que cobraron ejecutoria a partir de las cinco de la tarde (05:00 p. m.), del 30 de marzo de 2017, según constancia Secretarial (f. 8), que indica que todos los documentos son copias auténticas.

El título ejecutivo complejo también está conformado por:

- Copia de la Resolución RDP 039445 de 18 de octubre de 2017, mediante la cual la UGPP reliquidó una pensión de vejez, en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja (fls. 35-40).
- La liquidación de costas efectuada por la Secretaria del Despacho (f. 31)
- El auto de 1 de junio de 2017, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas (f. 32).

De lo anterior, se puede extraer que título ejecutivo base de la acción es un título complejo, y que reúne las **condiciones formales** ya señaladas, de conformidad con el artículo 297 numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, pues, además de aportarse de manera completa el título que da origen a la obligación, se verifica que la entidad llamada a responder es la **UGPP**.

En este punto, corresponde examinar si los documentos aportados reúnen los requisitos de **fondo**, que hacen relación a la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, en tanto que el mandamiento de pago solo procederá cuando los documentos anexados para el recaudo ejecutivo no dejan duda al juez de instancia, de la existencia de la obligación que se dice incumplida, dada su claridad, su condición de expresa y su exigibilidad.

Respecto al requisito de **claridad** de la obligación exigido por el artículo 422 del CGP, es pertinente advertir que una obligación es ejecutivamente clara, porque en el

² Consejo de Estado. C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726

documento constan todos los elementos que la conforman o le dan entidad, es decir, se conoce quién es el deudor, quién el acreedor y lo debido, esto es, el objeto de la prestación cuya satisfacción se reclama; se trata de una obligación **expresa**, o sea enunciada de modo inconfundible, en el documento que sirve de título, y **exigible**, porque no está sujeta a plazo o condición, lo que permite reclamar su cumplimiento.

En el caso concreto, los documentos que hacen parte del título ejecutivo indican la existencia de una obligación a favor del ejecutante y a cargo de la UGPP, originada en la sentencia emitida primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 15001 3333 004 2015 00181 00, en el siguiente sentido:

“CUARTO: Como consecuencia de la anterior, **a título de restablecimiento del derecho**, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, liquidar en debida forma, reconocer y pagar a la señora Marlene Morales Rincón, identificada con cédula de ciudadanía N° 21.223.892 de Villavicencio, el valor de la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de todos los salarios devengados durante el último año de servicios, esto es desde el 1 de noviembre de 1996 al 31 de octubre de 1997. Es decir que a los factores salariales ya reconocidos – sueldo (asignación básica más prima de antigüedad) bonificación por servicios prestados y bonificación por compensación, -se deberán adicionar los factores salariales auxilio de alimentación, prima de navidad, prima de vacaciones, prima semestral, con efectos fiscales a partir del 26 de marzo de 2010, por prescripción trienal.

QUINTO: La suma correspondiente deberá ser reajustada y actualizada en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la siguiente fórmula:

$$Rh = \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$$

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de emolumentos salariales y prestaciones, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período, como se indicó en la parte motiva de la presente providencia. Es entendido que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará mes por mes, para cada mesada pensional teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los reajustes reconocidos periódicamente, para deducir la indexación que afecta las sumas causadas.

SEXTO: Sobre los nuevos factores a tener en cuenta para el reconocimiento de la liquidación de la pensión de jubilación reconocida a la señora Marlene Morales Rincón, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP respecto de los cuales no se hayan realizado descuentos a seguridad social, se hagan deducciones legales durante los últimos cinco (5) años de prestación de servicios del accionante, es decir se aplicará la prescripción extintiva de la obligación sobre los aportes anteriores al 31 de octubre de 1992.

SÉPTIMO: Se ordena dar cumplimiento a esta providencia con observancia de lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

(...)

NOVENO: No condenar en costas en esta instancia...”

Esta providencia fue confirmada por el Superior mediante fallo de 24 de marzo de 2017, en la cual se condenó en costas de segunda instancia a la parte recurrente, esto es, la UGPP, y en consecuencia dispuso:

“Tercero: Fijar como agencias en derecho a cargo de la recurrente, la suma de \$148.601 que corresponde al 3% de las pretensiones de la demanda (\$4.953.637 fl. 9)”

El 30 de mayo de 2017, la Secretaría liquidó las costas, obteniendo un total de \$167.601 (f. 31), valor que fue aprobado por el Despacho, a través de auto de 1 de julio de 2017 (f. 32).

De lo anterior, se advierte que en la sentencia se imputa a la UGPP una obligación clara y expresa, ya que aunque fue proferida en abstracto, es liquidable mediante una operación matemática.

En cuanto a su exigibilidad, es pertinente señalar que el plazo aplicable es el contemplado en el título base de reclamación en los términos del artículo 192 del CPACA, el cual prevé que las condenas a entidades estatales serán cumplidas en un plazo máximo de 10 meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. En este orden, teniendo presente que la decisión en mención cobró ejecutoria el 30 de marzo de 2017 (fl. 8), los 10 meses de que trata la norma en mención se cumplieron el 30 de enero de 2018. Por tanto, al momento de presentación de la demanda, esto es, el 22 de agosto de 2018 (fl. 47) este plazo se encontraba superado, sin que hubiera caducado la acción. Estas razones llevan a colegir que la obligación contenida en el título ejecutivo complejo cumple también con el requisito de ser exigible actualmente.

Ahora bien, al cotejar las obligaciones derivadas de la sentencia con el acto proferido por la demandada, para efecto de dar cumplimiento a la misma (**Resolución RDP 039445 del 18 de octubre de 2017 (fl. 35-40)**), encuentra el Despacho que a la fecha no habrían obligaciones pendientes de pago derivadas de la sentencia que se pretende ejecutar como pasa a indicarse:

Condena y reliquidación pensional efectuada en Resolución RDP 039445 del 18 de octubre de 2017 por la UGPP.

Como se vio, la providencia objeto de recaudo, en lo que toca con la reliquidación pensional, ordenó ajustar la pensión de la accionante teniendo en cuenta el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios. En cuanto al pago de las diferencias de las mesadas, la sentencia previó que debía efectuarse a partir del 26 de marzo de 2010, por prescripción trienal

De manera que, la sentencia estipuló que deberían tenerse en cuenta para efecto de reliquidación pensional ordenada, los dineros percibidos por la demandante entre el 01 de noviembre de 1996 al 31 de octubre de 1997, por los siguientes conceptos:

- Asignación básica
- Prima de antigüedad
- Bonificación por servicios prestados
- Bonificación por compensación
- Auxilio de alimentación
- Prima de navidad
- Prima de vacaciones
- Prima semestral.

Revisado el acto administrativo con el que la UGPP pretende dar cumplimiento al fallo —**Resolución RDP 039445 del 18 de octubre de 2017**— (fls. 35), se evidencia que detalla la forma en que se hizo la liquidación correspondiente, en la que se tuvieron en cuenta como factores salariales, los siguientes:

AÑO	FACTOR	VALOR ACUMULADO	VALOR IBL	VALOR IBL ACTUALIZADO
-----	--------	--------------------	-----------	--------------------------

1996	ASIGNACIÓN BÁSICA MES	786,292.00	786,292.00	1,079,835.00
1996	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	28,344.00	28,344.00	38,912.00
1996	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	69,928.00	69,928.00	96,034.00
1996	PRIMA DE VACACIONES	213,431.00	213,431.00	293,110.00
1997	ASIGNACIÓN BÁSICA MES	4,481,870.00	4,481,870.00	6,155,067.00
1997	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	160,800.00	160,800.00	220,831.00
1997	BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTAD	243,930.00	243,930.00	334,995.00
1997	IBC	157,25.00	157,250.00	215,955.00
1997	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	396,840.00	396,840.00	544,991.00
1997	PRIMA DE NAVIDAD	518,607.00	518,607.00	712,216.00
1997	PRIMA DE SERVICIOS	150,370.00	150,370.00	206,507.00

De igual manera, en el acto administrativo de cumplimiento se señaló que los valores del IPC utilizados para actualizar el valor del IBL fueron: 1997: 17.68%, 1998:16,70%, y con base en dichas sumas, se determinó que dicho IBL ascendía a la suma de \$824.871, por lo que el 75% equivalía a \$618.653, valor correspondiente a la mesada pensional.

Asimismo, en la Resolución se aclaró que la señora Marlene Morales Rincón adquirió el **status de pensionada el 07 de octubre de 1999**, así mismo que la prima de vacaciones cancelada en el año 1997 no fue incluida, puesto que el valor certificado es superior al ordenado por el artículo 25 del Decreto 1045 de 1978, y que no había lugar a ordenar descuento por aportes, *“puesto que una vez hecha la liquidación de acuerdo al fallo, la mesada arrojada es inferior a la que recibe actualmente la pensionada”*.

En lo referente a las costas del proceso declarativo, el acto administrativo señaló: *“se observa que el juez de segunda instancia condena en agencias en derecho a cargo del recurrente la suma de \$167.601, con auto de 01 de junio de 2017 el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja, aprueba la liquidación de los gastos ordinarios sin embargo no se adjunta liquidación diferente a la ya ordenada por el Tribunal”*

De igual modo, en el ordinal segundo la Resolución en cita dispuso que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagaría a la interesada las diferencias que resultaran.

De lo anterior, se concluye que se tuvieron en cuenta la totalidad de factores ordenados en la sentencia, pero se desconoce si se efectuó pago alguno por concepto de costas procesales.

Cuestionamiento a la reliquidación planteados por el ejecutante

En el libelo introductorio, la demandante cuestionó esa liquidación por no incluir el valor reportado por el Ministerio de Agricultura —ente empleador—, por concepto de prima de vacaciones, indicó que luego de solicitar un nuevo certificado de factores salariales, pidió a la UGPP corregir el acto administrativo de cumplimiento, pero esta negó aduciendo que no podía incluir la reliquidar la prima de navidad, lo que según la parte ejecutante demuestra la inconsistencia de la entidad ejecutada.

De acuerdo con lo anterior, aseguró que la omisión de la UGPP redujo considerablemente los ingresos de la ejecutante, por lo que esta debe acatar la orden judicial y, por tanto, ajustar la mesada pensional de la siguiente manera:

TOTAL SALARIO DEVENGADO	\$5.271.162
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	\$185.356
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN	\$157.250
PRIMA DE VACACIONES	\$848.775
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$437.602
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	\$26.210
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	\$243.936
PRIMA DE JUNIO	\$521.434
PRIMA DE DICIEMBRE	\$1.034.217
BONIFICACIÓN QUINQUENAL	\$395.961

De conformidad con el anterior cuadro, el apoderado de la accionante calculó la mesada correspondiente al año 1997 en \$570.118,93, suma que actualizó anualmente hasta el año 2018, y confrontó ese monto con la mesada, que según él, fue reconocida y pagada, esto es, \$372.281, y obtuvo como diferencias pendientes de pago, hasta la fecha de radicación de la demanda, la suma de \$71.001.530,21.

Con relación a estas presuntas inconsistencias, de entrada, el Despacho descarta la liquidación efectuada por la parte accionante, por las razones que a continuación de exponen:

- En cuanto a la prima de vacaciones, se evidencia que el certificado de factores salariales obrante a folio 43, no ofrece claridad respecto del valor devengado por este concepto en el año 1997, pues, primero, aparece en la casilla correspondiente al mes de octubre la suma de \$25.239 y, luego, en otro cuadro, se visualiza la anotación “prima de vacaciones dos periodos” (Resaltado del Despacho) por valor de \$574.456, por tanto, se entenderá no corresponde únicamente al año 1997 y, por consiguiente, es claro que no puede ser tenido en cuenta en su totalidad para el cálculo de la mesada pensional de la accionante.

El Juzgado, dada la falta de claridad del certificado, estima que el monto señalado corresponde a lo percibido por la actora a título de prima de vacaciones por los periodos 1996 y 1997. Así las cosas, si al valor total certificado se le resta la suma correspondiente al primer año, es decir, \$249.080, puede determinarse que la prima de servicios del año 1997 corresponde a \$325.376.

- En lo relativo a la prima de navidad, encontramos que la parte accionante sumó los valores certificados en 1996 y 1997, obviando que el fallo fue claro en indicar que la pensión debía reliquidarse teniendo en cuenta los factores salariales devengados por la señora Marlene Morales, durante el último año de servicios, esto es, entre el 01 de noviembre de 1996 y el 31 de octubre de 1997, de manera que el valor certificado para el año 1996 debe dividirse en los 12 meses del año y multiplicarse por los 2 meses correspondientes noviembre de diciembre, para así obtener el valor correspondiente a dicha anualidad. La misma operación aritmética debe realizarse para calcular la prima de navidad correspondiente al año 1997, pero multiplicando esta vez por los 10 meses que laboró en el mismo.

Es preciso aclarar se debe proceder de igual manera con todas las prestaciones anuales, para determinar las doceavas que corresponden a cada periodo a liquidar.

- El profesional del derecho incluyó en la liquidación de la mesada pensional factores salariales que no fueron ordenados en la sentencia base de la ejecución, como son las bonificaciones por recreación y quinquenal.

- Para obtener la diferencias de las mesadas, se comparó el valor de la mesada pensional —erradamente obtenida—, con la suma de **\$372.281**, pero de acuerdo a lo plasmado en la Resolución RDP 039445 de 18 de octubre de 2018, este valor le fue reconocido a la demandante, a título de pensión de vejez, mediante la Resolución No. 2872 de 07 de diciembre de 2000, pero mediante la Resolución 4721 de 31 de diciembre de 2003 se ajustó la mesada pensional a **\$712.405**, efectiva a partir del 07 de octubre de 1999 (reverso fl. 35). Por consiguiente, esa era la suma anterior a la reliquidación, y que debe servir de base para el cálculo de la diferencia de las mesadas.

En este contexto, debe puntualizarse que el artículo 430 del Código General del Proceso, establece:

*"ART. 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste merito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente o **en la que aquel considere legal...**" (Negrillas del Despacho)*

De acuerdo con el Tribunal Administrativo de Boyacá, según la norma en cita *"la función del operador jurídico se extiende a analizar el control de legalidad de la petición, máxime si la sentencia objeto de ejecución contiene una condena en abstracto."* Advirtiendo, además, que los procesos ejecutivos adelantados ante esta jurisdicción no sólo buscan garantizar el pago de una acreencia, también deben propender por la protección del erario a través de un control estricto que impida el menoscabo injustificado de aquel.³

Confrontación de la reliquidación efectuada por la UGPP y la mesada que debió reconocerse según la sentencia.

Ahora, para efecto de determinar si la entidad accionada dio cabal cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia de 6 de julio de 2016, el Despacho procederá a liquidar la mesada pensional de la demandante con la inclusión de los factores ordenados en el título ejecutivo, y de acuerdo a las precisiones hechas con antelación, como sigue:

RELIQUIDACIÓN MESADA PENSIONAL			
DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 1996 A 31 DE OCTUBRE DE 1997			
FACTOR	1996	1997	TOTAL DEVENGADO ULTIMO AÑO
asignación básica	\$786.292,00	\$4.481.870,00	\$5.268.162
prima de antigüedad	\$ 60.604,00	\$ 376.998,00	\$437.602
bonificación por servicios		\$243.396,00	\$243.396
bonificación compensación		\$ 157.250,00	\$157.250
auxilio de alimentación	\$ 24.556,00	\$ 152.760,00	\$177.316
prima semestral		\$ 505.709,00	\$505.709
prima de vacaciones	\$ 41.513,33	\$ 271.146,67	\$312.660
prima de navidad	\$ 85.935,00	\$ 432.172,50	\$518.108
TOTAL			\$7.620.203
DEVENGADO/12= 100%			\$635.017

³ Providencia de 26 de abril de 2018, Radicación: 15001-3333-006-2016-00029-01, MP Clara Elisa Cifuentes Ortiz.

VALOR MESADA 75%	\$476.263
------------------	-----------

Ahora bien, tanto en la sentencia base de ejecución, como en el acto administrativo de cumplimiento se indica que la demandante adquirió el estatus pensional el **07 de octubre de 1999** (fls. r18 y 36), pero en la orden judicial nada se dijo respecto a la indexación de la primera mesada pensional. No obstante, recientemente el Tribunal Administrativo de Boyacá⁴ consideró que el artículo 430 del CGP ordena a la autoridad judicial a librar mandamiento en las condiciones que sean legales, por lo que carece de sustento dejar de indexar la primera mesada, con fundamento en la omisión cometida por el juez de la declaración, *“pues ello iría en contra vía con el ordenamiento constitucional, mucho más cuando la devaluación constituye un hecho notorio que ni siquiera requiere prueba. Dar prevalencia a una omisión judicial que desconoce la Constitución Política es tanto como avalar una vía de hecho, so pretexto de acatar un título ejecutivo, en este caso, constituido por una sentencia, cuando el sendero constitucional, de tiempo atrás...”*

En consecuencia, a pesar de que al momento de dictar el fallo que ahora se pretende hacer cumplir no se dispuso la indexación de la primera mesada, la misma debe realizarse a fin de garantizar que la titular del derecho pensional no pierda su capacidad adquisitiva, para ello, se aplicará la fórmula, aceptada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional⁵:

$$R = Rh \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

Donde, para el caso concreto, el valor **R** se determina multiplicando el valor histórico, que es el promedio de lo devengado por el demandante el último año de servicios (\$476.263) por el guarismo que resulte de dividir el **índice final** de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha en la cual la demandante adquirió el estatus pensional, es decir, a partir del 07 de octubre de 1999, por el **índice inicial** de precios al consumidor vigente a 01 de noviembre de 1997, fecha en que se retiró del servicio, así:

MESADA	ÍNDICE INICIAL	ÍNDICE FINAL	MESADA INDEXADA
\$476.263	85,17	108,14	\$ 604.736

Luego de efectuada la liquidación de conformidad con lo ordenado en el fallo que se pretende ejecutar, se advierte que:

1. Con la reliquidación pensional realizada en la Resolución RDP 039445 de 18 de octubre de 2017 por la UGPP, se reconoció al demandante un monto de pensión ajustado a lo ordenado en el fallo que se pretende ejecutar, y
2. Le asiste razón a la entidad ejecutada cuando afirma que la mesada pensional reliquidada es inferior a la que venía devengando, pues, como ya se enunció, la pensión de jubilación de la demandante fue reliquidada mediante la Resolución No. 4721 de 30 de diciembre de 2003, en suma de \$712.405, efectiva a partir del 07 de octubre de 1999, de lo que lógicamente se desprende que no existen diferencias a favor de la demandante pendientes de pago, por ende, tampoco de se generaron montos por concepto de indexación y/o intereses moratorios.

De lo que se infiere que, en el caso concreto, aunque la UGPP no aplicó la fórmula establecida por el precedente judicial para la indexación de la primera mesada, si actualizó el valor aplicando a cada factor salarial el IPC certificado para el año corrido siguiente, ajuste que resultó ser más favorable para la señora Marlene Morales Rincón, por tanto, la obligación derivada de la sentencia consistente en la reliquidación pensional

⁴ Providencia de 27 de septiembre de 2018, radicación 15001 3333 002 2017 00120-01, M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz

⁵ Sentencia SU 637, 17 de noviembre de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

se cumplió, evidenciándose que no había lugar al reconocimiento de diferencias pensionales, por consiguiente, del título presentado para la ejecución no se desprende la existencia actual de una obligación pendiente de pago a favor del demandante, por concepto de capital, indexación o intereses, por tanto, no se librará mandamiento de pago por dichos conceptos.

Ahora bien, la parte demandante también solicitó al Despacho librar mandamiento de pago por la suma de ciento setenta y siete mil seiscientos un mil pesos (\$167.601), correspondientes a las costas y agencias en derecho, las cuales se encuentran pendiente de pago, siendo procedente librar mandamiento de pago por este concepto.

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- Abstenerse de librar mandamiento por los conceptos de diferencias en las mesadas pensionales, indexación e intereses moratorios, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Librar mandamiento de pago a favor de la señora **Marlene Morales Rincón** en contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, por la suma de **ciento setenta y siete mil seiscientos un mil pesos (\$167.601)**, por concepto de costas y agencias en derecho.

TERCERO.- Notificar personalmente del contenido de esta providencia al representante legal de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de esta providencia y de la demanda. Póngasele de presente que las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la secretaría del Despacho a su disposición. Hecha la notificación, por Secretaría remítasele de manera inmediata y a través de servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del mandamiento de pago.

CUARTO.- Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de la presente providencia y de la demanda.

QUINTO.- Notificar del contenido de esta providencia a la parte demandante y a su apoderado de conformidad con el artículo 201 del CPACA, esto es, por estado.

SEXTO.- La parte actora deberá sufragar los gastos de notificación, consignando la suma de nueve mil pesos (\$ 9.000.) M/CTE, que corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
Envío a través del servicio postal autorizado de copia de la demanda, anexos y esta providencia a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.	\$ 9.000
TOTAL	\$ 9.000

Dicho valor deberá ser consignado en la cuenta de ahorros No. 4-1503-0-21081-1 del Banco Agrario de la ciudad de Tunja, Convenio N° 13226, y acreditar su pago ante la

Secretaría del Juzgado, dentro de los cinco (05) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Si al vencimiento del plazo previsto en el artículo 178 del CPACA, no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha **desistido** de la demanda y se procederá de conformidad con lo establecido en el precitado artículo.

SÉPTIMO.- Conceder a la parte demandada, el término de cinco (5) días para que dentro de ellos efectúe el pago de la obligación por la cual se le ejecuta, conforme lo señala el artículo 431 del CGP. Dicho término comenzarán a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del CPACA.

OCTAVO.- La parte demandada, cuenta con el término de diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, para proponer excepciones, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 442 del CGP, se reitera que este término, comenzará a correr veinticinco (25) días después de surtida la notificación de conformidad al art. 199 del CPACA.

NOVENO.- Reconocer personería al abogado Manuel Alejandro Guarín Patarroyo, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.174.159 de Tunja y T.P. N° 238.319 C.S.J., como apoderado especial de la parte ejecutante, en los términos y para los efectos del memorial poder conferido y que obra a folio 1 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

⁶CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° <u>65</u> De Hoy 18 de diciembre de 2018 A LAS 8:10 a.m.
FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario

⁶ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 18 de diciembre de 2018 en la página web www.pamgjudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández - Secretario